



Vista la solicitud de acceso a la información pública con nº de expediente 001-043317 realizada por _____ con Documento Nacional de Identidad _____ formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), se informa lo siguiente:

Respecto a la primera cuestión se adjunta Anexo con tres tablas que recogen los siguientes datos:

- Las dos primeras tablas muestran las llegadas a Ceuta y a Melilla por vía Terrestre y por vía Marítima desde el año 2009.
- La tercera refleja los intentos de asalto y las entradas por esta vía a Ceuta y a Melilla desde 1998.

En relación la segunda cuestión solicitada se participa que no se facilita el número de devoluciones efectuadas de nacionales marroquíes y argelinos en aplicación del artículo 14.1. c) de la LTAIPBG, que dice: "El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: c) Las relaciones exteriores".

Se informa al ciudadano que en el año 2019, último año cerrado, se produjeron un total de 3.871 expulsiones/devoluciones desde los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros.

Se recuerda que el Consejo de Transparencia, en numerosas ocasiones, ha manifestado que "dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida".



(...) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos. Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”.

En definitiva, (...) “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión”.

Asimismo, se participa que no se tienen datos registrados que permitan cuantificar numéricamente las devoluciones realizadas de manera directa (en el marco de las 72 horas siguientes a su llegada).

Por lo que respecta a los procedimientos de devolución se participa que las devoluciones efectuadas a Marruecos se realizan vía terrestre, mientras que las efectuadas a Argelia se realizan vía marítima, salvo excepciones que aconsejen otra vía de transporte.

En relación con los tratados de readmisión con ambos países, señalar que con Marruecos existe un tratado de readmisión firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992, según el cual “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido (art. 1)”, señalándose respecto de la obligación de aceptar la readmisión, cumplida la circunstancia prevista en el artículo 1, que el convenio prevé en su artículo 3 una serie de excepciones:

“No hay obligación de readmisión:

a) Para los nacionales de Estados terceros que tengan fronteras comunes con el Estado requirente;



b) Para los extranjeros que hubiesen sido autorizados a permanecer en el territorio del Estado requirente con posterioridad a su entrada ilegal;

c) Para los extranjeros que, en el momento de su entrada en el territorio del Estado requirente, estén en posesión de un visado o de un permiso de estancia concedido por dicho Estado o que, con posterioridad a su entrada, han obtenido del mismo un visado o un permiso de estancia;

d) Para las personas a quienes el Estado requirente haya reconocido la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951".

Por último, en referencia a su solicitud "quisiera saber las figuras recogidas en la ley de extranjería desde que se creó hasta día de hoy (devoluciones, expulsiones, readmisiones, denegación de entrada", trasladar al ciudadano que puede encontrar las respuesta a las referidas cuestiones en el contenido de la citada ley.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que éste deba entenderse presuntamente desestimada, y en el caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 14 de agosto de 2020.

LA DIRECTORA DEL GABINETE



Ana María Prejigueiro Rodríguez